



## **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

### **SALA LABORAL**

**Medellín, agosto 25 de 2023**

**Radicado:** 05001 31 05-004-2019-00318-01  
**Demandante:** NATIVIDAD DEL SOCORRO SÁNCHEZ DÍAZ  
**Demandado:** COLPENSIONES  
**Asunto:** APELACIÓN DE SENTENCIA.  
**Tema:** PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE

La Sala Sexta de decisión, presidida por la magistrada ponente LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia; decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 13 de la ley 2213 de 2022.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

### **1. ANTECEDENTES**

#### **LA DEMANDA<sup>1</sup>**

Pretende la actora el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con pago de las mesadas de forma retroactiva, al igual que los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Para sustentar sus súplicas indicó que el 27 de diciembre de 1981 contrajo matrimonio con el señor Francisco Javier Jaramillo Jaramillo, siendo quien cubría todos los gastos del hogar y proveía lo necesario para su sostenimiento.

---

<sup>1</sup> Pág. 5/67 Archivo N° 1 – primera instancia

Adujo que el señor Jaramillo Jaramillo cotizó al ISS un total 521 semanas todas previas a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, empero a partir del año 1993 por quebrantos de salud se vio imposibilitado para conseguir un empleo formal y continuar realizando las cotizaciones al sistema pensional.

Narró que su esposo Francisco Javier falleció el 31 de enero de 2013 por lo que solicitó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, pero en resolución GNR 207413 de junio 9 de 2014 le fue concedida la indemnización sustitutiva de esta pensión por valor de \$5'055.865.

Indicó que insistió en el reconocimiento pensional, siendo negado en resolución SUB 290790 de noviembre 7 de 2018 argumentando que el afiliado no satisfizo las 50 semanas de cotización en los 3 años previos a su fallecimiento, sin que sea aplicable el principio de la condición más beneficiosa al no haber ocurrido el deceso en los 3 años posteriores a la vigencia de la Ley 797 de 2003. reprocha de la entidad no haber verificado los presupuestos de los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990.

### **Contestación a la demanda<sup>2</sup>**

Colpensiones aceptó lo referente al reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, indicando que no fueron satisfechos los requisitos de causación de la prestación principal al no acumular la densidad de cotización necesaria. Así las cosas, se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones que denominó: Inexistencia de la obligación, ausencia de causa para pedir, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas y compensación.

### **Sentencia de primera instancia<sup>3</sup>**

Emitida el 21 de junio de 2022 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín donde se absolvió a Colpensiones de todas las súplicas elevadas por la demandante a quien se gravó en costas.

---

<sup>2</sup> Pág. 74/81 Archivo N° 1

<sup>3</sup> Archivo N° 5 y 6

El *A quo*, tras aludir al régimen legal aplicable para causar la pensión de sobrevivientes que lo es la Ley 797 de 2003 indicó que el afiliado no satisfizo la densidad de cotización. Mientras que de cara al principio de la condición más beneficiosa atendiendo a la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la CSJ y de la Corte Constitucional en sentencia SU 005 de 2018 concluyó que el afiliado fallecido pese a acopiar 521 semanas, al momento del cambio legislativo introducido por la Ley 797 de 2003 no ostentaba la calidad de cotizante activo y en año previo a la vigencia de la Ley 797 de 2003 no satisfizo las 26 de cotización, por tanto el señor Francisco Javier Jaramillo Jaramillo no dejó causada la pensión de sobrevivientes.

## **2. RECURSO DE APELACIÓN**

Decisión que fue recurrida por la activa insistiendo en la procedencia de la pensión de sobrevivientes por aplicación del principio de la condición más beneficiosa a la luz del Decreto 758 de 1990, explicando que el actor tenía más de 300 semanas previo a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, generando un derecho que no podía ser modificado por las normas venideras, pese a que el fallecimiento ocurrió en vigencia de la Ley 797 de 2003.

Señaló que la actora cumple con los requisitos de test de procedencia de la sentencia SU 005 de 2018, es una persona vulnerable, analfabeta, carente de recursos económicos propios, quien estaba en condición de dependencia respecto a su esposo fallecido y que ha sido diligente en el reclamo del derecho pensional. Por lo tanto, no pueden aplicarse la norma actual ya que se generan consecuencias desfavorables y desconoce que el afiliado acumuló unas semanas considerables que sustentan la prestación que ahora se reclama.

## **3. ALEGATOS**

Concedido el término que establece el artículo 13 de la ley 2213 de 2022, Colpensiones presentó escrito donde reitera su posición de defensa referente a la inexistencia de presupuestos de causación de la pensión de sobrevivientes, ora por

cumplimiento de los requisitos de la Ley 797 de 2003, ora por aplicación del postulado de la condición más beneficiosa, el que de cara a la interpretación jurisprudencial de la CSJ exige que el fallecimiento del afiliado ocurra previo al 29 de enero de 2006.

#### **4. CONSIDERACIONES**

Sea lo primero indicar que en este caso se encuentra por fuera de discusión que:

1. Que los señores Francisco Javier Jaramillo Jaramillo y Natividad del Socorro Sánchez Díaz contrajeron nupcias el 27 de diciembre de 1981, sin que obren anotaciones de divorcio, ni cesación de efectos civiles (Pág. 22/25 archivo N° 1).
2. Que el 31 de enero de 2013 falleció Francisco Javier Jaramillo Jaramillo.
3. Que el 14 de febrero de 2014 la señora Sánchez Díaz solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pretensión frente a la que no se pronunció la entidad ya que en resolución GNR 207413 de 2014 procedió a la liquidación de la indemnización sustitutiva en cuantía de \$5'055.865 a pagar en el periodo 201407 (Pág. 36/38 archivo N° 1).
4. Que el 4 de octubre de 2018 la señora Sánchez Díaz insistió a Colpensiones en el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, negada en resolución SUB 290790 de 2018 señalando que el afiliado no satisfizo las 50 semanas en los 3 años previos a su fallecimiento, sin posibilidades de aplicación del postulado de la condición más beneficiosa de cara al Decreto 758 de 1990 ya que el fallecimiento no ocurrió previo al 29 de enero de 2006 (Pág. 45/55 archivo N° 1).
5. Que el afiliado Jaramillo Jaramillo cotizó al extinto ISS 521.43 semanas acopiadas entre julio de 1971 a abril de 1993 (Pág. 57/67 archivo N° 1)

Establecido lo anterior, y comoquiera que no existe discusión sobre la calidad de beneficiaria de la eventual prestación por parte de la señora Natividad del Socorro Sánchez, en tanto a ella le fue concedida la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, corresponde a esta corporación determinar si el señor Francisco Javier Jaramillo Jaramillo dejó causada la pensión de sobrevivientes, situación que

se dilucidará previas algunas consideraciones respecto al principio de la condición más beneficiosa.

## **NORMATIVA APLICABLE PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES**

Pues bien, ocurrido el fallecimiento del afiliado Francisco Javier Jaramillo Jaramillo el 31 de enero de 2013, debe acudir a la norma vigente para tal data, esto es la **Ley 797 de 2003 artículo 12** que señala como presupuesto de causación en caso de fallecimiento del afiliado, que este hubiere cotizado un mínimo de 50 semanas en los tres años inmediatamente anteriores al fallecimiento, condición que como se ha indicado, no fue satisfecha por el causante.

No obstante, pasará la Sala a analizar la prestación pretendida a la luz del principio constitucional de la condición más beneficiosa (final del artículo 53 Superior), advirtiendo que, al no ser un principio absoluto, para su aplicación debe tenerse en cuenta las reglas fijadas por la jurisprudencia nacional, poniendo de presente que respecto al tema analizado existe diversidad de criterios entre la Sala de Casación de la CSJ y la Corte Constitucional, debiendo esta corporación cumplir con los principios de transparencia y razón suficiente exponiendo ambos criterios para determinar por cuál de ellos se inclina.

## **POSICIÓN DE LA SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

Al respecto resulta ilustrativa la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la C.S.J SL 3010 de 2020 (ver además SL1142 de 2020, SL356 de 2019, SL763 de 2018, SL2183 de 2018, entre otras), cuando expone:

*“cuando en el cambio normativo el legislador no hubiera previsto un régimen de transición, como ocurrió frente a la pensión de sobrevivientes al expedirse la Ley 100 de 1993 y se cumplieran las exigencias de la normativa anterior en número mínimo de cotizaciones, aunque el riesgo se estructurara bajo la reglamentación*

*posterior, podía el juez acudir a este postulado, en aras de proteger una expectativa legítima.”*

Para la alta Corporación, el principio aludido se satisface permitiendo que el análisis de procedencia de la prestación se efectúe acudiendo a la norma inmediatamente anterior, sin que sea posible realizar un recorrido histórico entre regímenes, en tanto reconoce que los cambios legislativos han de surtir efectos y por ello las normas derogadas no pueden aplicarse indefinidamente y concluye *“el principio de la condición más beneficiosa emerge como un puente de amparo construido temporalmente para que transiten, entre la anterior y la nueva ley”* (Sentencia SL 4650 de 2017).

A través de su jurisprudencia la Sala de Casación Laboral de la CSJ ha consolidado su posición respecto a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, que en tratándose de pensión de sobrevivientes permite que para efectos de verificar la satisfacción de la densidad de cotización para causación de la prestación establece unos límites: **a)** sólo es posible acudir al régimen o norma inmediatamente anterior en vigencia a aquella en que ocurrió el deceso y **b)** concede un espacio temporalmente a modo de transición, en tanto no opera de forma indefinida.

Así en lo atinente a la posibilidad verificación entre la Ley 100 de 1993 en su versión original y las modificaciones introducidas por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, crea una zona de paso de 3 años para la ocurrencia del deceso, a saber: entre el 29 de enero de 2003 y el mismo día y mes del año 2006 lapso durante el cual el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su versión original continuará produciendo efectos, respecto a la densidad de cotización necesaria para causar la pensión. (CSJ SL 4650 del 25 de enero de 2017)

La Sala de Casación Laboral de la CSJ de forma férrea ha señalado que, por efectos del principio de la condición más beneficiosa no es posible al operador judicial realizar una búsqueda histórica entre normas desuetas, por cuanto se desconocería el efecto de la retrospectividad de la ley, dando aplicación a una disposición que, de

manera expresa, fue derogada. (al respecto la Sentencia SL 969 de 2023, CSJ SL1742-2021, CSJ SL142-2020, entre otras).

Ahora bajo esta misma lógica, cuando se pretende la aplicación de las reglas del Decreto 758 de 1990 respecto a la densidad de cotización considera la alta corporación que es necesario que el fallecimiento del afiliado ocurra en vigencia de la Ley 100 de 1993 en su versión original, quien no satisfizo el número de semanas exigidas por el artículo 46 de esta codificación, pero acopió más de 300 semanas de cotización previo a la Ley 100 de 1993 ó 150 semanas entre los 6 años previos a la vigencia del cambio legislativo e igual cantidad en los 6 años previos al deceso. Al respecto la sentencia SL 680 de 2023 indicó:

*“Tal cual lo memoró el juzgador de la alzada, esta Corte tiene adocctrinado que la norma con vocación de ser aplicada, en casos como el litigado, es la vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado. No obstante, bastante se ha reiterado que es viable acudir a la condición más beneficiosa, cuando el asegurado fallece en vigencia de la Ley 100 de 1993 original y no satisface el número de semanas exigidas por el artículo 46 ibídem, pero deja cotizadas i) 300 semanas, en cualquier época, antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 o, ii) 150 entre el 1 de abril de 1988 y el 1 de abril de 1994, es decir, dentro de los 6 años anteriores a que cobrara vigor jurídico el estatuto de la seguridad social integral, siempre que en esta última hipótesis, sume 150 semanas aportadas dentro de los 6 años anteriores al fallecimiento...”*

## **POSICIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL**

De forma paralela, la Corte Constitucional, efectuando un análisis del asunto de cara a valores fundantes del Estado Constitucional como la garantía a la seguridad social que propenden por amparar al beneficiario del riesgo de desaparición del ingreso del cotizante, sustituyendo este emolumento por el provisto por la pensión, desde la sentencia SU 005 de 2018 unificó los criterios de aplicación de tal principio respecto de la pensión de sobreviviente, indicando que éste no solo se satisface cuando se aplica la norma inmediatamente anterior a la vigente, sino que se extiende a todo esquema normativo anterior bajo cuyo amparo el afiliado haya contraído una expectativa legítima.

En tal línea argumentativa, explicó que es posible conceder efectos ultractivos a las disposiciones del Decreto 758 de 1990 o normas anteriores cuando el fallecimiento del cotizante hubiera ocurrido en vigencia de las reformas introducidas por la Ley 797 de 2003, siempre que se proteja a una persona vulnerable, al respecto indicó la sentencia SU 005 de 2018:

*“Para la Sala Plena, solo respecto de las personas vulnerables resulta proporcionado interpretar el principio de la condición más beneficiosa en el sentido de aplicar, de manera ultractiva, las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 –o regímenes anteriores- en cuanto al requisito de las semanas de cotización, para efectos de valorar el otorgamiento de dicha prestación económica, aunque la condición de la muerte del afiliado hubiese acaecido en vigencia de la Ley 797 de 2003. Si bien estas personas vulnerables no adquirieron el derecho a la pensión de sobrevivientes en vigencia del Acuerdo 049 de 1990 –u otro anterior-, los aportes del afiliado, bajo dicho régimen, dieron lugar a una expectativa que, por las circunstancias particulares del tutelante (esto es, su situación de vulnerabilidad, al haber superado el Test de Procedencia descrito en el numeral 3 supra), amerita protección constitucional. Para estas personas, las sentencias de tutela deben tener un efecto declarativo del derecho y, en consecuencia, solo es posible ordenar el pago de mesadas pensionales a partir de la presentación de la acción de tutela. En este sentido, con fines de unificación, se ajusta la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia”.*

Concepto de persona vulnerable que construyó la Corte Constitucional a través de una serie de requisitos que, reunidos en conjunto, identifican al reclamante como un sujeto de especial protección constitucional y en favor de quien debe morigerarse la vigencia de las reformas en material de requisitos para causar la pensión de sobrevivientes, requisitos que describe así:

Test de procedencia	
Primera condición	Debe establecerse que el accionante pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en uno o varios supuestos de riesgo tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento.
Segunda condición	Debe establecerse que la carencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que solicita el accionante afecta directamente la satisfacción de sus necesidades básicas, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas.
Tercera condición	Debe establecerse que el accionante dependía económicamente del causante antes del fallecimiento de este, de tal manera que la pensión de sobreviviente



	sustituye el ingreso que aportaba el causante al tutelante-beneficiario.
<b>Cuarta condición</b>	Debe establecerse que el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir la pensión de sobrevivientes.
<b>Quinta condición</b>	Debe establecerse que el accionante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Presupuestos que deben satisfacerse en conjunto, pues de lo contrario no se está en presencia de un sujeto de especial protección y frente a quienes el análisis de procedencia de la pensión de sobreviviente ha de respetar las reglas fijadas por la Sala de Casación Laboral de la C.S.J, el que resulta razonable al establecer un margen de análisis de causación bajo el régimen inmediatamente anterior, así concluyó la H. Corte Constitucional:

*“ 205. Esto es así por cuanto la interpretación adoptada por la Corte Suprema de Justicia no diferencia los sujetos, sino que hace una aplicación idéntica en todos los casos. Para la Sala Plena, debe existir una interpretación ponderada del principio de la condición más beneficiosa en los casos de pensión de sobrevivientes, para dar una mayor protección a aquellas personas que se encuentran en una situación de afectación intensa a sus derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas, derivada de sus específicas condiciones.*

*206. Entonces, la interpretación de la Sala Laboral es constitucional, razonable y válida cuando se trata de personas que no cumplen con las condiciones del Test de procedencia objeto de unificación en el numeral 3 supra, pero deja de serlo cuando la persona frente a quien se va a aplicar la regla tiene este cúmulo de circunstancias que permiten realizar una aplicación distinta con el fin de garantizar sus derechos fundamentales”*

La Corte Constitucional manifiesta que la regla dispuesta por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que permite la aplicación de la condición más beneficiosa en cuanto al requisito de semanas únicamente de la norma inmediatamente anterior, y solo si el causante fallece en los tres años posteriores a la expedición de la Ley 797 de 2003, resulta desproporcionada y contraria a los derechos fundamentales a

la seguridad social, mínimo vital y vida en condiciones dignas, cuando quien pretende acceder a la pensión de sobrevivientes es una persona vulnerable.

Para la Corte Constitucional los fines que persigue el Acto Legislativo 01 de 2005 de hacer viable el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, en condiciones de universalidad y de igualdad para todos los cotizantes, tienen un menor peso en comparación con la muy severa afectación de los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo vital y vida en condiciones dignas de las personas vulnerables.

### **POSICIÓN ASUMIDA POR ESTA CORPORACIÓN.**

Enunciadas ambas visiones de los altos tribunales esta sala de decisión opta por extender los efectos de principio de la condición más beneficiosa atendiendo a los lineamientos de la Core Constitucional, toda vez que bajo la misma se satisfacen los compromisos del sistema de seguridad social, con cobertura de las contingencias que afectan la capacidad económica de la población, bajo la acreditación de unos requisitos de causación de la prestación, que si bien han sido sustituidos por ajustes al modelo de coberturas, permiten identificar que se cumple el rol contributivo del afiliado y el deber asegurador del sistema.

Este cuerpo colegiado resalta que no se trata del desconocimiento del carácter retrospectivo de las normas, sino que, con una concepción amplia de la garantía pensional, identifica aquellos eventos en que el presupuesto de la densidad de cotización se satisfizo en vigencia de una regulación previa, no así el fallecimiento, sin que por ello se afecte el equilibrio económico del sistema en tanto la cantidad de cotizaciones que se acreditan superan con creces aquellas exigidas por la norma actual, solo que corresponden a un momento histórico previo al exigido.

Ahora, la mayoría de integrantes de esta Sala considera que, al igual que en sede constitucional, dentro del trámite ordinario debe verificarse el cumplimiento del test de procedencia que introdujo la Corte Constitucional en sentencia SU 005 de 2018,

con el cual se identifica una condición de vulnerabilidad a quienes el sistema judicial debe responder de forma diferencial. Lo anterior bajo el entendido que los criterios de vulnerabilidad en él expuestos implican su estudio tanto en la acción de tutela, como en los juicios ordinarios.

## **6. CASO CONCRETO**

De cara al material probatorio adosado al trámite y atendiendo a los precedentes legales y jurisprudenciales reseñados se estableció que:

1. Se demostró que con ocasión del fallecimiento del Francisco Javier Jaramillo, Natividad del Socorro Sánchez es la beneficiaria de los beneficios pensionales por este causados: Mediante resolución GNR 207413 de junio 9 de 2014 Colpensiones reconoció a Natividad del Socorro Sánchez la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez, prestación contemplada en el artículo 49 de la Ley 100 de 1993 la que tiene como premisa de adjudicación la verificación de la calidad de “miembro del grupo familiar del afiliado” de donde se desprende que Colpensiones no discute que la señora Sánchez Díaz ostenta la calidad de beneficiaria de los beneficios pensionales causados con ocasión del fallecimiento del su esposo Francisco Javier Jaramillo Jaramillo.

Calidad que además se verifica a través del registro civil de matrimonio (Pág. 24/25 archivo N° 1) el que da cuenta de la celebración del rito católico el 27 de diciembre de 1981, documento que no tiene incluido nota de disolución del vínculo religioso ni cesación de efectos civiles.

En adición obran las declaraciones extra procesal rendidas el 10 de julio de 2018 por Ángela del Socorro Jaramillo Rico y Ofelia Briñez Salazar quienes expresaron conocer de larga data a la pareja conformada por la actora y el señor Francisco Javier Jaramillo Jaramillo, quienes desde su matrimonio en diciembre de 1981 mantuvieron una convivencia singular e ininterrumpida, sin separaciones física, tampoco liquidación del vínculo patrimonial, unión que solo se rompió con el fallecimiento del

afiliado (Pág. 32) declaración que no fue cuestionada por la pasiva, quien tampoco pidió su ratificación judicial (artículo 262 CGP), por tanto la misma obra como prueba útil para establecer los hechos debatidos y los efectos pretendidos.

**2. Causación de la pensión de sobrevivientes.**

Se identifica que el afiliado Francisco Javier Jaramillo satisfizo la densidad de cotización que exigían los artículos 6 y 25 del Decreto 758 de 1990, en particular acumulaba más de 300 semanas con anterioridad a su fallecimiento y la vigencia de la Ley 100 de 1993, dejando así causada la pensión de sobrevivientes en favor de sus beneficiarios.

Ahora en cuanto a la satisfacción del test de procedibilidad que indica la Corte Constitucional en la SU-05 de 2018, el mismo se satisface en conjunto, así:

Condiciones	Análisis en el caso concreto	cumple
Pertenecer a un grupo de especial protección constitucional o encontrarse en uno o varios supuestos de riesgo	Pertenece al grupo de especial protección constitucional en tanto corresponde a un adulto mayor (64 años en la actualidad), en una edad con bajas posibilidades de incorporación en el mercado laboral, aunado a que no tiene una capacitación académica en tanto dentro del interrogatorio de parte expresó que cursó hasta tercer grado de primaria.	Si
Afectación directa de la satisfacción de necesidades básicas, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas por la carencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes	Natividad del Socorro Sánchez no es pensionada, ni cuenta con una actividad económica estable que le permita proveer para sí los ingresos que garantizan su subsistencia, así lo relataron Ángela del Socorro Jaramillo Rico y Ofelia Briñez Salazar en declaración extrajuicio del 10 de julio de 2018 (pág. 32 archivo N° 1) al indicar que la demandante no cuenta con el apoyo económico de otras personas ya que pese a tener hijos, estos tienen un hogar independiente.  En adición debe considerarse la avanzada edad de la actora, quien paulatinamente verá menguadas sus capacidades para realizar tal actividad, sin que cuente con una capacitación en profesión u oficio que le permita su incursión en el mercado laboral.	Si
Dependencia económica del causante antes del fallecimiento de este, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso	Se sirve la corporación de la declaración de las señoras Ángela del Socorro Jaramillo Rico y Ofelia Briñez Salazar al expresar que Natividad del Socorro siempre dependió económicamente de su esposo, ya que esta nunca trabajó. En adición la demandante en interrogatorio de parte expresó que el salario de su esposo era destinado a los gastos del hogar, que al momento del fallecimiento de	Si

	aquel el hogar estaba conformada por la pareja y un hijo menor de edad.	
Circunstancias de imposibilidad de cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones del causante	En declaración de parte realizada la demandante expresó que su esposo tuvo un vínculo laboral con la empresa medias cristal, pero dejó de trabajar por dificultades de salud.	Si
El accionante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes	La demandante el 14 de febrero de 2014, esto es, en un tiempo prudente luego de ocurrido el fallecimiento de su esposo (1 año) agotó la reclamación administrativa ante Colpensiones, quien sin un análisis de satisfacción de la pensión de sobrevivientes concedió la indemnización. E insistió en la procedencia de la prestación con reclamación del 4 de octubre de 2018 (pág. 39 archivo N ° 1) e instauró la acción judicial el 14 de mayo de 2019, lo que evidencia que ha estado activa en el reclamo del derecho pensional	Si

Así las cosas, hay lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, derecho pensional en favor de la accionante que no resulta incompatible el pago de indemnización sustitutiva ya que esta se asume como un beneficio provisional, que ha de ceder respecto al derecho principal y que hace procedente la compensación de lo ya recibido (al respecto la sentencia C.S.J SL 1624 de 2018)

Prestación que corresponde a 1 SMLV en tanto pese a que los salarios de cotización del afiliado fallecido eran ligeramente superiores a la remuneración mínima legal, al ponderarlos y aplicarles la tasa de reemplazo del 45% (artículo 48 Ley 100 de 1993) se obtendría una suma inferior a salario mínimo. Prestación concedida a razón de 13 mesadas anuales al haberse causado superado el límite temporal que establece el acto legislativo 01 de 2005.

Hay lugar al disfrute de la pensión de forma concomitante al fallecimiento del afiliado, sin embargo, dados los efectos de la prescripción extintiva, cuyo recorrido se interrumpió con la reclamación del 4 de octubre de 2018 habrán de reconocerse las mesadas causadas con posterioridad al 4 de octubre de 2015. Se aclara que, si bien el 14 de febrero de 2014 se había elevado una reclamación inicial, entre el momento en que se notificó el resultado de aquella el 24 de junio de 2014 (pág. 41 archivo N° 1) y la presentación de la acción judicial, 14 de mayo de 2019 transcurrió un tiempo superior a 3 años que señala el artículo 151 del CPTSS.

Calculado el retroactivo pensional causado entre el 4 de octubre de 2015 y extendido hasta el 31 de agosto de 2023 asciende a OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$87.464.358) suma de la cual se autoriza a Colpensiones a realizar los descuentos con destino al sistema de salud.

Año	Valor mesada	N° mesadas	Sub total
2015	\$ 644.350	3.86	\$ 2.487.191
2016	\$ 689.455	13	\$ 8.962.915
2017	\$ 737.717	13	\$ 9.590.321
2018	\$ 781.242	13	\$ 10.156.146
2019	\$ 828.116	13	\$ 10.765.508
2020	\$ 877.803	13	\$ 11.411.439
2021	\$ 908.526	13	\$ 11.810.838
2022	\$ 1.000.000	13	\$ 13.000.000
2023	\$ 1.160.000	8	\$ 8.120.000
TOTAL			\$ 87.464.358

A partir del 1° de septiembre de 2023 Colpensiones seguirá reconociendo la mesada pensional en cuantía de 1 SMLMV a razón de 13 mesadas anuales.

Ahora, atendiendo a la excepción de compensación propuesta por la accionada y que alude al pago de la indemnización sustitutiva de que trata la resolución GNR 207413 de 2014 que lo fue por valor de \$5.055.865 se autoriza que del retroactivo pensional antes ordenado se efectúe la **compensación indexada** de la suma ya reconocida, esto es, no solo de la suma pagada, pero además descontando su actualización teniendo en cuenta la variación del IPC de julio de 2014 (fecha en que se puso a disposición el pago) y como índice final la variación reportada en el mes que se incluya en nómina de pensionados el retroactivo pensional.

Finalmente, no se accederán a los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 que reclama la señora Natividad, toda vez que el reconocimiento pensional se efectúa producto de interpretaciones jurisprudenciales, mientras que la negativa de la entidad accionada estuvo sustentada en la aplicación plena de la norma, causal eximente de los mentados intereses

En subsidio y para remediar los efectos de la pérdida del poder adquisitivo del dinero se ordena la indexación del retroactivo pensional.

**COSTAS:** Costas en ambas instancias a cargo de Colpensiones en primera instancia reducidas en un 50% al no prosperar la totalidad de las pretensiones, en esta se tasan las agencias en derecho en la suma de 1 SMLMV.

## 7. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL, REVOCA** de forma total la providencia emitida el 21 de junio de 2022 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín y en su lugar dispone:

**Primero:** Declara que, por efectos de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, el afiliado Francisco Javier Jaramillo Jaramillo dejó causada la pensión de sobrevivientes en favor de su esposa Natividad del socorro Sánchez Díaz.

**Segundo:** Ordena a Colpensiones a reconocer a la señora Natividad del socorro Sánchez Díaz la suma de OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$87.464.358)) como retroactivo pensional causado entre el 4 de octubre de 2015 y el 31 de agosto de 2023, suma que se pagará con la debida indexación.

A partir del 1° de septiembre de 2023 Colpensiones seguirá reconociendo la mesada pensional en cuantía de 1 SMLMV a razón de 13 mesadas anuales.

**Tercero:** Autoriza a Colpensiones a descontar del retroactivo pensional los aportes con destino al sistema de salud, al igual que efectuar la compensación de la suma de \$5.055.865 más su indexación, esta como indemnización sustitutiva a la pensión de sobrevivientes.

**Cuarto:** Prospera parcialmente la excepción de prescripción.

**Quinto:** Costas en ambas instancias a cargo de Colpensiones en primera instancia reducidas en un 50%. En esta se tasan las agencias en derecho en la suma de 1 SMLMV en favor de la parte demandante.

Se ordena la notificación mediante EDICTO y vencido el término se ordena devolver el expediente al Juzgado de origen. Se termina la audiencia y en constancia se firma por quienes intervinieron.

Las Magistradas,

  
LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE  
Con aclaración de voto

  
MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

  
ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ





## **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

### **SALA LABORAL**

**Medellín, Agosto 25 de 2023**

**Radicado:** 05001 31 05-004-2019-00318-01  
**Demandante:** NATIVIDAD DEL SOCORRO SÁNCHEZ DÍAZ  
**Demandado:** COLPENSIONES  
**Asunto:** ACLARACION DE VOTO  
**Tema:** PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE  
**Magistrada Ponente:** LILIANA MARIA CASTAÑEDA DUQUE

### **ACLARACION DE VOTO**

Presento aclaración de voto el asunto en el cual fungí como ponente, respecto del análisis que se hizo en la providencia en punto que la aplicación del precedente de la Corte Constitucional en materia de condición mas beneficiosa de la sentencia SU 005 de 2018 comporta necesariamente la realización del “test de procedibilidad” en sede ordinaria.

En vista que la postura mayoritaria de las integrantes de esta Sala de Decisión es efectuar dicho test para conceder la prestación, es que profiere la sentencia en tal sentido.

No obstante, conocida por esta Sala es mi postura frente al particular con base en criterios de legalidad y argumentación que proviene de las Altas Cortes:

1. En la sentencia SU-05 de 2018 de la Corte Constitucional exige el cumplimiento de un “test de procedencia”, basado en criterios de vulnerabilidad de los solicitantes de la pensión de sobrevivientes pero el mismo es únicamente exigible para cuando se acciona por medio de la tutela, sin que sea una obligatoria su observancia en la jurisdicción ordinaria ante el Juez Natural de este tipo de asuntos que es el Juez Laboral del Circuito.
2. Por ello, cuando las personas solicitan la protección constitucional del reconocimiento pensional basado en la condición mas beneficiosa es lógico que se debe atender a criterios de subsidiariedad para la procedencia de la protección por medio de la acción constitucional, pero en la vía ordinaria, el Juez Laboral no

está sometido a tarifa alguna de prueba en materia de pensión de sobrevivientes pudiendo fijar su propio convencimiento a partir de la *ratio decidendi* de la sentencia SU 05 de 2018 y los medios probatorios idóneos para fijar su convencimiento<sup>4</sup>.

3. Se precisa resaltar que sobre esta sentencia han existido toda suerte de interpretaciones adicionales en punto a los requisitos que la propia Corte ha establecido en su test de procedencia con miras a superar los requisitos de subsidiariedad para acceder al mecanismo de la acción de tutela y ello ha llevado a que erróneamente se entienda que la sentencia de unificación sólo permite la aplicación de la condición más beneficiosa exclusivamente para las personas vulnerables o que están casi en estado de indigencia para solicitar la prestación. **Nada mas equivocado. Lo que sostuvo la Corte Constitucional en su sentencia de unificación es que para efectos de la protección del derecho vía tutela si se hace necesario superar el test de procedencia, pero cuando la discusión se ventila en la vía ordinaria judicial ante el Juez Natural que es el juez laboral del circuito este “test de procedencia” de la SU 05 de 2018 no tiene aplicación**, pues el mismo solo guarda sentido respecto de la protección que haga por el mecanismo subsidiario y excepcionalísimo de tutela, mas no para quienes acudan a la jurisdicción ordinaria.
4. Incluso, ese punto fue el argumento más atacado por parte de quienes salvaron su voto en la sentencia de unificación, que lejos de oponerse al mantenimiento de la pensión de sobrevivientes por condición más beneficiosa, lo que hicieron en cada uno de los salvamentos de voto fue exponer la grave equivocación de la sala en restringir el acceso a esta pensión de sobrevivientes a la comprobación de situaciones de vulnerabilidad y dependencia económica en sede de tutela, nuevas exigencias del cambio de jurisprudencia que se introduce en esta sentencia de unificación lo cual desconoce la evolución jurisprudencial que ha tenido y su protección desde el Alto Tribunal, pues se limitó la acción de tutela en estos escenarios, debiendo los afectados interponer demandas ordinarias cuando no se supera este test de procedencia creado a partir de esta sentencia. Importante resulta entonces traer a colación dichos argumentos vertidos en los salvamentos de voto de la decisión:

***“33. La Sala incorporó como tercer elemento del “test de procedencia” de la tutela para valorar la aplicación de la condición más beneficiosa en pensión de sobrevivientes ante el RPM, que el accionante demuestre la dependencia***

---

<sup>4</sup> La superación del Test de Procedencia permite valorar las distintas circunstancias que inciden en la eficacia del mecanismo judicial principal e idóneo para la garantía de los derechos que ampara el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, que en este caso corresponde al proceso ordinario laboral, que regula el Capítulo XIV del Decreto Ley 2158 de 1948, Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS). SENTENCIA SU-05 DE 2018

***económica con el causante. Este requerimiento es inaceptable porque en la práctica termina por imponer una exigencia no contemplada universalmente en la Ley para el acceso a la pensión de sobreviviente, desconociendo que, por ejemplo, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, no están llamados a acreditar tal requisito el cónyuge o compañero(a) permanente ni los hijos menores de edad (primer y segundo órdenes excluyentes para ser beneficiarios), estando constitucionalmente prohibido a los operadores judiciales la imposición de restricciones adicionales para su acceso, tal como lo ha señalado esta Corporación.***

***34. La Corte, al convertir la dependencia económica en un factor obligatorio de procedencia del recurso de amparo, creó una barrera jurídicamente injustificable, en contra de aquellas personas que, aun cuando puedan ser titulares del derecho a la pensión de sobrevivientes –por ser cónyuges o hijos menores de edad del causante y cumplir las demás condiciones legales–, sean sujetos de especial protección (primer paso del “test”), acrediten que la carencia de la prestación impacta en sus “necesidades básicas” (segundo paso del “test”), y sin embargo no demuestren dependencia económica con el fallecido –pese a que la misma ley no se los exige–, están excluidas del ejercicio de la acción de tutela.***

*35. Por su parte, la cuarta etapa del “test” es tal vez la que directamente obliga al juez a pronunciarse sobre el fondo del asunto, exigiendo el adelantamiento de una rigurosa labor probatoria, no obstante que se trata de un momento procesal en el que no es admisible perseguir certezas jurídicas sobre el objeto de la tutela. Esta cuarta fase parte de exigirle al operador constitucional, por un lado, la constatación previa de que en el caso concreto es necesario examinar la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, por incumplimiento definitivo de los requisitos vigentes para acceder a la pensión de sobrevivientes; y por otro lado, la valoración de un elemento fáctico difícil de probar, como lo es la “imposibilidad” en que se encontraba el causante para superar tales requisitos, lo que, de entrada, es además un elemento ajeno al mandato constitucional de la condición más beneficiosa, pues desconoce, como se explicará más adelante, que su principal propósito es el de la protección de una expectativa legítimamente estructurada por el actor”.*

5. Del mismo modo y en el mismo sentido importante es traer a colación una sentencia reciente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la que respecto a test de procedibilidad de la sentencia SU 005 de 2018 se tiene la misma interpretación y es el que el mismo sólo debe superarse en las acciones constitucionales y no en los juicios ordinarios.

*“En punto a este tópico, esta Corporación ha enseñado precisamente, que el denominado test de procedencia no tiene por objeto reemplazar los requisitos legales que regulan la pensión de sobrevivientes, pues a más de que esa no es la función constitucional, ni legal de la jurisprudencia de las Altas Cortes, el mismo fue creado con el fin de flexibilizar el requisito de subsidiaridad de la acción de tutela como mecanismo procedimental para obtener la pensión de sobrevivientes en el régimen de prima media con prestación definida, como en su texto se menciona. Al respecto, vale la pena recordar que la pensión objeto de litigio no está supeditada a que el pretense beneficiario acredite una condición particular de vulnerabilidad, superando condiciones o reglas establecidas en un test como el de la referencia, cuyo fin, según se ha dicho, es diametralmente opuesto”. CSJ SL 969 de 2023. Radicación 95.296 del 22 de marzo de 2023.*

Acorde con lo expuesto, estimo que derrotada mi ponencia en cuanto a no condicionar la aplicación del principio constitucional de la condición mas beneficiosa al examen del test de procedibilidad de la sentencia SU 05 de 2018 en los juicios ordinarios, y en vista que acogiendo en la providencia el criterio de la mayoría que se impone la decisión en todo caso es la misma, se expide la providencia pero dejando claro y por sentado mi posición sobre el tema que es la razón que motiva la aclaración de mi voto en ese asunto específico.

  
LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE  
Magistrada



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**  
**SALA LABORAL**

**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

**Radicado:** 05001 31 05-004-2019-00318-01  
**Demandante:** NATIVIDAD DEL SOCORRO SÁNCHEZ DÍAZ  
**Demandado:** COLPENSIONES  
**Decisión:** REVOCA  
**Magistrada ponente** LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN**

Fijado hoy 29 de agosto de 2023 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibidem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS

SECRETARIO